

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	María Socorro Usma Ospina
DEMANDADO	AFP Porvenir S.A. y COLPENSIONES
PROCEDENCIA	Juzgado 15 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 015 2019 00657 01
INSTANCIA	Segunda
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 97 de 2021
TEMAS Y SUBTEMAS	Ineficacia de traslado
DECISIÓN	Revoca parcialmente

Hoy, **veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021)**, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados: Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de **Colpensiones** y grado jurisdiccional de consulta a favor de la misma entidad ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **María Socorro Usma Ospina**, trámite en que también se demandó a la **AFP Porvenir S.A.**, radicado único nacional 05001 3105 **015 2019 00657** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con los acuerdos del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto estudiado, discutido y aprobado en sala virtual, según acta N° 16, el que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

Solicita la demandante la nulidad del traslado que realizo al RAIS a través de la AFP Porvenir S.A., al carecer tal acto jurídico de validez por existir vicio en el consentimiento, en razón de la omisión del deber de información y el no cumplimiento de las obligaciones de ley; que se declare valida, vigente y sin solución de continuidad la afiliación al RPMPD administrado por COLPENSIONES, y en consecuencia, se condene a la AFP Porvenir S.A. al traslado de todos los aportes efectuados, incluidos los rendimientos y sin descuento por cuotas de administración; a Colpensiones a tener como válida, vigente y continua su afiliación al régimen de prima media. Pide también condena en costas.

En sustento de ello afirma que, nació el **28 de junio de 1963**, con cotizaciones al sistema pensional en el ISS hoy Colpensiones desde el mes de abril de 1986, con traslado al RAIS a través de la AFP Porvenir S.A. en el mes de julio de 1994, sociedad que no fue precisa al momento de afiliarla, *toda vez que no brindó una información real acerca de cuál sería una proyección estimada de la mesada pensional en dicho régimen*, a pesar de serle más beneficioso el de prima media por sus condiciones particulares. Agrega que *no se le explicó de manera clara y precisa los riesgos y beneficios que corría al estar en el RAIS*, no se le indico que el monto depende del capital ahorrado, incurriendo la AFP *en una omisión al no haberle dado la información suficiente a la afiliada, tal como lo ordena artículo 9º de la Ley 1328 de 2009*. El 05 de marzo de 2019 elevó a Porvenir solicitud de traslado, negada por encontrarse en la restricción de edad prevista en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. El 16 de agosto de 2019 presentó idéntica solicitud a Colpensiones, negada por la misma razón. Puntualiza que el daño causado se refleja en la diferencia en la mesada pensional.

En auto del **23 de octubre de 2019** se admitió y ordenó dar trámite a la acción y debidamente enteradas de la actuación las demandadas allegaron escritos de contestación así:

Colpensiones acepta como ciertas la fecha de nacimiento de la demandante, la afiliación a esa entidad y el tiempo en que efectuó cotizaciones. Es cierta la solicitud de retorno al RPMPD efectuada a Porvenir y a Colpensiones y las respuestas emitidas. Los demás supuestos no son hechos. **Se opuso** a la prosperidad de las pretensiones y formuló las **excepciones** de inexistencia de la ineficacia en el traslado de régimen, devolución de la totalidad de aportes debidamente indexados, prescripción, imposibilidad de condena en costas, buena fe y la innominada o genérica.

La **AFP Porvenir** manifiesta en relación con los hechos no constarle o no ser ciertos, precisando que, al momento del traslado de régimen efectuado por la demandante, esa sociedad *entregó toda la información que tenía a su disposición sobre el régimen pensional del RAIS, montos de cotización, devolución de saldos, redención del bono pensional, factor herencia y todo lo que competía para que se formara el consentimiento libre de vicios en la suscripción de la afiliación.* **Se opuso** a la prosperidad de las pretensiones y formuló las **excepciones** de prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

La primera instancia terminó con sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito, en la que se declaró **la ineficacia** del traslado de la demandante al RAIS, administrado por la AFP Porvenir S.A., ordenándole a esta sociedad restituir a Colpensiones, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, ***el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante, sin incluir otros conceptos ni cuotas de administración,*** condenó a Colpensiones a activar la afiliación de la señora Usma Ospina al

RPMPD, a recibir el saldo existente en la cuenta de ahorro individual, declaró implícitamente resueltas las excepciones propuestas salvo la de prescripción sobre la que hizo pronunciamiento expreso, sin que tengan prosperidad. Impuso condena en costas a ambas accionadas, fijando el monto de las agencias en derecho y ordenó surtir el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones.

Argumentó la falladora que en los autos no queda evidenciado el suministro de información completa y suficiente a la demandante por parte de la AFP al momento del traslado de régimen pensional, como se explica en la línea mayoritaria de la jurisprudencia especializada, de la que cita algunos radicados, precisando que con ocasión de tales decisiones ha venido ajustando su criterio, pues también existe aclaración de voto frente al tema suscrita por el magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán, de la que cita apartes, ordenando las restituciones en la forma indicada e imponiendo costas a ambas accionadas por haber manifestado oposición a las pretensiones.

El **recurso de apelación** fue oportunamente interpuesto por la apoderada de **Colpensiones**, para solicitar la revocatoria de la sentencia, porque esta entidad es un tercero ajeno al negocio jurídico del cual se deprecia ineficacia y no se puede ver perjudicada por el error en que incurrió la parte demandante. **En lo referente a las cuotas de administración y demás rubros**, de ratificarse la ineficacia del traslado, por conducta indebida de la AFP, esta debe asumir a su cargo los deterioros del bien administrado, es decir mermas del capital para financiar la pensión de vejez, ya sea por pago de mesadas o por gastos de administración en que hubiere incurrido, que deben asumirse por la administradora con cargo a su propio patrimonio, ello sustentado en la sentencia 31989 de 2008, de la que cita apartes. Finalmente, no tiene soporte la condena por costas procesales, porque la entidad ha obrado de buena fe y actuó según la

característica filosófica de sus funciones, sin que pueda ejecutar actos prohibidos por las leyes y menos violar sus propios reglamentos, cita a partes de sentencia del Consejo de Estado del año 1999 sobre el particular.

De la oportunidad para presentar alegaciones hizo uso el apoderado de la **AFP Porvenir S.A.**, solicitando mantener la absolución frente a la restitución de las cuotas de administración, al tener este descuento sustento en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, cumpliendo tales dineros su cometido, sin que se encuentren en poder de la administradora, atentando contra toda lógica y constituyendo un enriquecimiento orden en tal sentido, pues toda decisión judicial de traslado de régimen pensional debe tener como objetivo constitucional la estabilidad y sostenibilidad financiera del sistema, como se explicó por la Sala plena especializada de esta Corporación en sentencia de unificación del 14 de agosto de 2019, frente al caso de los pensionados.

La **apoderada de Colpensiones**, insiste en que esta entidad es un tercero ajeno al negocio jurídico cuya ineficacia se pretende, y no debe verse perjudicado por el error en que incurrió la demandante, quedando evidenciado que realizó su afiliación al RAIS a través de un acto libre y voluntario, sin que existiera vicio en el consentimiento, contando con las herramientas suficientes para acceder a la información necesaria para aclarar dudas respecto a los movimientos, rendimientos y utilidades de su cuenta de ahorro. En el evento de declararse que la ineficacia la misma se dio por conducta indebida de la AFP Porvenir S.A., y esta entidad debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, debiéndose ordenar la restitución de los aportes realizados, incluidos los destinados al pago de administración de la cuenta, al pago de primas de seguros previsionales por invalidez, muerte y a financiar el fondo de

solidaridad pensional, cita como sustento de ello sentencia de la Sala de Casación Laboral.

Para efectos de decisión, basten las siguientes,

Consideraciones

Conforme al recuento realizado, el **problema jurídico** en esta instancia se contrae a determinar, si declarada la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS, procede su retorno automático al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES, con las consecuentes restituciones económicas por parte de la AFP y los conceptos que estas comprenden. Finalmente se analizará el tema relativo a la condena en costas para Colpensiones.

Pues bien, se explica por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde la sentencia 31989 de 2008 bajo la figura de la nulidad, y a partir del año 2014 sentencia SL12136-2014, que la sanción impuesta por el ordenamiento jurídico a la afiliación o traslado de régimen desinformado es la *ineficacia* o exclusión de todo efecto jurídico a tal acto, lo que encuentra fundamento en los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el Decreto 663 de 1993, artículo 97 numeral 1º, aplicable a las AFP desde su creación, pues solo así es viable la escogencia de las mejores opciones del mercado, deber este que ha tenido una evolución en su regulación, inicialmente como información propiamente – años 1993 a 2009 conforme a Decreto 663 de 1993 – Estatuto Financiero-, Decreto 720 de 1994, la Ley 795 de 2003; posteriormente agregándose la asesoría ó buen consejo entre 2009 Ley 1328 de 2009, Decreto 2241 de 2010; y por último, con la doble asesoría desde el año 2014 Ley 1748 de esta anualidad, Decreto 2071 de 2015 y Circular Externa 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera, sin que para su exigencia tenga incidencia el hecho de gozar o no el afiliado de

régimen de transición o estar próximo o no a pensionarse o tener o no consolidado su derecho pensional, y sin que de la suscripción del formulario se infiera el cumplimiento de esta obligación y tampoco se convalide la misma por el transcurso del tiempo, por la movilidad entre administradoras del RAIS, por reasesoría posterior o por actos de relacionamiento, invirtiéndose en estos casos la carga de la prueba, quedando en cabeza de las administradoras de pensiones la obligación de acreditarla, arts. 1604 del C. C. y 167 del C. G. del P., la que por demás se juzga al momento del acto inicial, por la relevancia e implicaciones que conlleva para el derecho pensional, de carácter fundamental a voces del artículo 48 Superior y 4º de la Ley 100 de 1993 (ver entre otras sentencias SL19447-2017, SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019, SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL1838-2019, SL4343-2019, SL4937-2019, SL5144-2019, SL 5462-2019, SL5533-2019, SL149-2020, SL373-2020, SL1763-2020SL081-2021 y SL145-2021), tesis ratificada vía tutela por la misma Corporación entre otras en sentencias (STL3182-2020, STL3187-2020, STL3191-2020, STL3193-2020, STL3196-2020, STL3197-2020, STL3199-2020, STL3200-2020, STL3201-2020, STL3202-2020, STL3226-2020, STL, 18 mar. 2020, rad. 56794, STL, 18 mar. 2020, rad. 57402, STL, 18 mar. 2020, rad. 57902, STL, 18 mar. 2020, rad.58678, STL, 18 mar. 2020, rad. 58918, STL, 18 mar. 2020, rad. 59124, STL, 15 abr. 2020, rad. 57168, STL, 15 abr. 2020, rad. 59268, STL, 30 abr. 2020, rad. 59302).

Brillando por su ausencia prueba de tales circunstancias en el caso a estudio, pues la AFP convocada al trámite no allegó prueba de la completa y oportuna información entregada a la demandante al momento de la vinculación a la que se hace referencia en el escrito de contestación, por lo que acertada resulta la declaratoria de **ineficacia** dispuesta por la primera instancia, caracterizándose esta sanción porque desde su nacimiento el acto carece de

efectos jurídicos, debiendo volver las cosas al estado anterior, explicándose por la jurisprudencia especializada que en estos casos:

... los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros. Así mismo, ha dicho que esta declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues estos recursos, desde el nacimiento del acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJSL1689-2019, CSJSL3464-2019, CSJSL4360-2019 entre otras).

Y en sentencia SL2877-2020, radicación Nro. 78.666, fecha 29 de julio de 2020, frente al tema en concreto de las restituciones, luego de transcribir el artículo 1746 del Código Civil, precisó:

Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.

Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular.

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene

derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cubre a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Subrayado intencional.

Y en relación con los porcentajes para el fondo de garantía de pensión mínima dijo:

En cuanto a los aportes para financiar la garantía de pensión mínima, es oportuno señalar que el artículo 14 de la Ley 797 de 2003 estableció aportes adicionales sobre el ingreso base de cotización con destino al fondo de solidaridad pensional para financiar la garantía de pensión mínima, para quienes devengaran entre 4 y 16 a 20 salarios mínimos legales mensuales, así como un fondo para el manejo de los mismos –artículo 14 ibídem-.

Pues bien, dicho artículo fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional, a través de sentencia C-797-2004, pero quedaron vigentes los aportes adicionales, de modo que dichos recursos los manejan las administradoras de pensiones privadas, en una subcuenta separada hasta que se cree de nuevo un fondo similar que se encargue de su administración; de hecho, de la subcuenta de cada AFP se financian aquellas prestaciones. Así lo regula el artículo 8.º del Decreto 510 de 2003, hoy compilado en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1833 de 2016. Además, el artículo 7.º del Decreto 3995 de 2008 contempla que cuando se efectúe un traslado de recursos del RAIS al régimen de prima media con prestación definida, debe incluirse la cotización correspondiente para la garantía de pensión mínima.

Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y concluye la Corte:

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima».

Acogiéndose por esta instancia un argumento de autoridad y acatándose el precedente que en línea mayoritaria sostiene la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, no tienen prosperidad las consideraciones de la falladora de primer grado tendientes a excluir de la orden de restitución las cuotas de administración, máxime si se tiene en cuenta el inciso 2º del art. 7º del Código General del Proceso y lo previsto en sentencia de tutela radicado 59370 del 06 de mayo de 2020, en que el órgano de cierre de esta especialidad exhorta a los jueces a acatar el precedente vertical, en aras de la garantía de los principios de seguridad jurídica e igualdad, pudiendo apartarse del mismo siempre y cuando se cumpla con una carga argumentativa transparente y suficiente,

... mediante un proceso expreso de contra-argumentación que explique las razones del disenso, bien por: (i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto, (ii) cambios normativos, (iii) transformaciones sociales que obligan a dar una nueva mirada a determinada cuestión, o (iv) divergencias hermenéuticas fundadas en la prevalencia de mejores y más sólidos argumentos que permiten un desarrollo más amplio de los derechos, libertades y garantías constitucionales. Así, la posibilidad de separarse del precedente emanado de las corporaciones judiciales de cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer término, un deber de reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de explicitación de las razones de su desconsideración en el caso que se juzga (C-621-2015).

Lo que no realiza la a quo, siendo evidente que en este asunto no se superan tales supuestos, sino que por el contrario la identidad fáctica de los casos ya analizados por la alta corporación es total frente al que se decide

en esta ocasión y sin que se haya operado un cambio normativo o transformaciones sociales que obliguen a nuevas consideraciones, razón por la que **se revoca parcialmente el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia, para ordenar a la AFP PORVENIR S.A.,** trasladar a COLPENSIONES, dentro del plazo allí fijado, además del valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante incluyendo el porcentaje deducido por gastos de administración (que en los términos del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, incluyen además de tal concepto, las primas de seguros y reaseguros al igual que el porcentaje destinado a garantía de pensión mínima).

Finalmente, teniendo en cuenta que Colpensiones es vinculada al trámite con el fin de hacerle oponible las órdenes impartidas en la sentencia, lo que no le impide ejercer su derecho de defensa, **habrá de revocarse parcialmente el numeral 6º** de la decisión para exonerar a esta entidad de la condena en costas.

Vale aclarar que en este caso no se está autorizando un traslado de régimen desatendiendo la restricción temporal del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, *después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez*, sino imponiendo la sanción de ineficacia por no haberse dado una libertad informada en la elección de régimen pensional al momento de la vinculación y movilidad entre administradoras del RAIS, en los términos del literal b) de la misma norma en concordancia con el artículo 271 del mismo estatuto, decisión con la que en manera alguna se atenta contra la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pues con el traslado integro de recursos se garantiza la equivalencia de condiciones en aportes en el evento de haberse mantenido la vinculación, máxime cuando si bien es cierto esta es una regla introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el 48 de la Constitución Política,

debe tenerse en cuenta el Acto Legislativo 03 de 2011, artículo 1º, que modificó el artículo 334 superior relativo al régimen de Hacienda Pública, que en su **parágrafo** reza: ***al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su efectiva protección.***

Al estar en discusión la eficacia del acto jurídico de traslado, no aplica para esta el termino prescriptivo que para la nulidad relativa prevé el artículo 1750 del Código Civil, pues según la jurisprudencia especializada, entre otras, sentencia CSJ SL1689-2019, dicha figura no opera «*de manera automática, en perjuicio de la posibilidad de acceder a derechos laborales o pensionales que gozan del carácter de imprescriptibles*», razón por la cual «*el análisis de la pretensión relativa a la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional*», al ser «*es una cuestión inherente al derecho a la seguridad social*», que redundando en «*un aspecto ínsito a la posibilidad de adquirir una prestación pensional*» no es sujeta a esa figura y, por tanto, puede reclamarse o hacerse exigible judicialmente en cualquier tiempo.

Sin costas en esta instancia ante la prosperidad parcial del recurso y por conocerse en grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca parcialmente la sentencia revisada por apelación y consulta**, proferida dentro del proceso ordinario promovido por **María Socorro Usma Ospina** contra las **AFP Porvenir S.A. y Colpensiones**, así:

El numeral 2º de la parte resolutive para incluir dentro de los conceptos que debe restituir la AFP Porvenir S.A. a Colpensiones la

totalidad de aportes realizados por la afiliada, sin descuento alguno, tal como se explicó en la parte motiva, y **el numeral 6 °** para exonerar a **Colpensiones** de la condena en costas.

En lo demás confirma la decisión.

Sin costas en esta instancia ante la prosperidad parcial del recurso y por conocerse en grado jurisdiccional de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el Decreto 806 de 2020.

Los magistrados (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 92** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, 28 de **mayo de 2021**

Secretario